

sabilidades tanto al concesionario como a las demás personas físicas o entidades relacionadas con la instalación o el suministro de la misma.

Previamente al levantamiento del acta de puesta en marcha de la instalación, se deberá comprobar por la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía que el concesionario ha presentado la documentación necesaria que acredite, a juicio de dicha Delegación, que dispone de un servicio adecuado a efectos del cumplimiento de lo estipulado en esta condición.

Quinta.—De acuerdo con lo establecido en el artículo 34 del repetido Reglamento General, y sin perjuicio de lo señalado en los demás artículos del capítulo V del mismo, el concesionario está obligado a efectuar los suministros y realizar las ampliaciones necesarias para atender a todo peticionario que solicite el servicio, dentro de los términos de la concesión. En el caso de que el concesionario se negara a prestar el suministro solicitado alegando insuficiencia de medios técnicos, la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía comprobará si tiene fundamento técnico tal negativa y, en caso contrario, hará obligatorio el suministro, imponiendo o proponiendo en su caso la correspondiente sanción.

Sexta.—La determinación de las tarifas de aplicación del suministro de gas se registrará en todo momento por el capítulo VI del Reglamento General citado. Sin perjuicio de lo anterior, el concesionario queda sujeto a cuentas prescripciones se establecen en dicho Reglamento General, así como al modelo de política anexa a éste y a cuantas otras disposiciones hayan sido dictadas o se dicten por este Ministerio de Industria y Energía sobre suministro de gases combustibles y sus instalaciones.

Séptima.—La presente concesión se otorga por un plazo de doce años, contados a partir de la fecha de publicación de esta Orden en el «Boletín Oficial del Estado», durante el cual el concesionario podrá efectuar el suministro y la distribución de gas mediante las instalaciones a que se ha hecho referencia, según el proyecto presentado. Dichas instalaciones revertirán al Estado al terminar el plazo otorgado en esta concesión o la prórroga o prórrogas que puedan otorgarse de acuerdo con el artículo 18 del Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles.

Octava.—La Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía cuidará del exacto cumplimiento de las condiciones estipuladas por esta Orden.

Una vez autorizadas y construidas las instalaciones, la Delegación Provincial inspeccionará las obras y montajes efectuados y, al finalizar éstas, y después de haber comprobado que el concesionario ha entregado el certificado final de obra de las instalaciones (firmado por Técnico superior competente y visado por el Colegio Oficial correspondiente), levantará acta sobre dichos extremos, que habrá de remitir seguidamente a la Dirección General de la Energía.

Los reconocimientos, ensayo pruebas, de carácter general o parcial, que según las disposiciones en vigor hayan de realizarse en las instalaciones comprendidas en la zona de concesión, deberán ser comunicados por el concesionario a la correspondiente Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía con la debida antelación. A efectos del levantamiento del acta de puesta en marcha, dicha comunicación deberá efectuarse antes de proceder al relleno de las zanjas previstas para el tendido de las canalizaciones, o con anterioridad a la realización de las operaciones que posteriormente dificulten la inspección de cualquier instalación objeto de esta concesión.

Novena.—Serán causa de extinción de la presente concesión, además de las señaladas en el artículo 17 del Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles, las siguientes:

a) El incumplimiento del artículo 13 del vigente Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles.

b) La introducción de cualquier variación o ampliación no autorizada por el Ministerio de Industria y Energía en la ejecución de los proyectos, salvando las modificaciones precisas para que se cumplan las disposiciones vigentes.

c) Si no se llevasen a cabo las instalaciones de acuerdo con las condiciones impuestas en esta Orden y en la autorización para el montaje de las mismas.

Sin embargo, si por evolución de la técnica de distribución de gas, por utilización de diferentes primeras materias, o por otras causas, no fuese adecuado el mantenimiento de alguna o algunas de las instalaciones objeto de la presente Orden, el concesionario podrá solicitar del Ministerio de Industria y Energía:

1. Autorización para la modificación o sustitución de las instalaciones, sin alterar las restantes condiciones de la concesión y con la misma fecha de reversión que las instalaciones sustituidas, o bien,

2. El otorgamiento de la correspondiente concesión, para las nuevas instalaciones, si por la importancia de las inversiones que las mismas supongan no pudiese obtener una compensación económica adecuada durante el plazo que restase para la caducidad de la concesión antes mencionada, aunque teniendo en cuenta siempre los derechos que el Estado pueda tener sobre los elementos cambiados.

Décima.—La concesión se otorga sin perjuicio de terceros y dejando a salvo los derechos particulares.

Undécima.—Las instalaciones a establecer cumplirán las disposiciones y normas técnicas que en general sean de aplicación y, en particular, las correspondientes del Reglamento General

del Servicio Público de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, de 28 de octubre, normas para su aplicación o complementarias, Reglamento de Recipientes a Presión, Reglamentos Electrotécnicos, Reglamento de Actividades Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligrosas, normas sobre instalaciones distribuidoras, así como cuantas otras disposiciones se dicten sobre el servicio público de suministro de gases combustibles.

Duodécima.—En todas las obras, instalaciones, servicios y adquisiciones en general, de cualquier clase, se deberá cumplir lo establecido en la Ley de 24 de noviembre de 1939 sobre ordenación y defensa de la industria (artículos 10 y siguientes).

Decimotercera.—Esta concesión se otorga sin perjuicio e independientemente de las autorizaciones, licencias o permisos de competencia municipal, provincial u otros, necesarios para la realización de las obras de las instalaciones de gas.

Decimocuarta.—El concesionario, para transferir la titularidad de la concesión, deberá obtener previamente autorización del Ministerio de Industria y Energía, y se deberán cumplir las obligaciones prescritas en la concesión y ajustarse a lo establecido en el artículo 14 del Reglamento General del Servicio Público de Gases Combustibles, aprobado por Decreto 2913/1973, de 28 de octubre.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos oportunos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 12 de febrero de 1981.—P. D., el Subsecretario, Enrique de Aldama y Miñón.

Ilmo. Sr. Director general de la Energía.

6719

CRDEN de 16 de febrero de 1981 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 20.193, promovido por «Malaba, S. A.», contra denegación tácita por silencio administrativo.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 20.193, interpuesto por «Malaba, S. A.», contra denegación tácita por silencio administrativo, se ha dictado con fecha 9 de diciembre de 1980, por la Audiencia Nacional de Madrid, sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando como estimamos en parte el recurso interpuesto por el Procurador don Julián Zapata Díaz, en nombre y representación de «Malaba, S. A.», contra la desestimación por silencio de las reclamaciones formuladas ante los Ministerios de Obras Públicas y de Industria, debemos declarar procedente la indemnización de daños y perjuicios por la paralización de las labores en la mina «Electra», por prohibirse su avance hacia el viaducto ocho de la carretera nacional VI en su nuevo trazado, imponiendo a conservación de macizos de protección y de diversos pozos y galerías para asegurar la ventilación, cifrando la misma en sesenta millones novecientos noventa mil cuatrocientas cincuenta y nueve pesetas, condenando a la Administración del Estado a que pague dicha cantidad al recurrente, desestimándolo en las restantes peticiones y sin hacer expresa condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 16 de febrero de 1981.—P. D., el Subsecretario, Enrique de Aldama y Miñón.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

6720

ORDEN de 16 de febrero de 1981 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 21.058, promovido por doña Amelia Peiró Martí y don Blas Cano Aparicio contra resolución de este Ministerio de 15 de enero de 1979.

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 21.058, interpuesto por doña Amelia Peiró Martí y don Blas Cano Aparicio contra resolución de este Ministerio de 13 de enero de 1979, se ha dictado con fecha 22 de octubre de 1980, por la Audiencia Nacional de Madrid, sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso interpuesto por el Procurador don Albito Martínez Díez, en nombre y representación de doña Amelia Peiró Martí y don Blas Cano Aparicio, contra resolución del Ministro de Industria y Energía de trece de enero de mil novecientos setenta y

nueve, confirmatoria de la de veintisiete de mayo de mil novecientos setenta y siete de la Dirección General de Industrias Alimentarias y Diversas que denegó a los aquí recurrentes la autorización para concentrar las industrias harineras de su propiedad, la que declaramos, confirmándola conforme a derecho, todo ello sin expresa condena en costas.

Así por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 18 de febrero de 1981.—P. D., el Subsecretario, Enrique de Aldama y Miñón.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

6721

*ORDEN de 16 de febrero de 1981 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 862/1977, promovido por don Ignacio Menchacatorre Díaz de Mendivil contra resolución de este Ministerio de 10 de diciembre de 1976.*

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 862/1977, interpuesto por don Ignacio Menchacatorre Díaz de Mendivil contra resolución de este Ministerio de 10 de diciembre de 1976, se ha dictado con fecha 11 de diciembre de 1980, por la Audiencia Territorial de Madrid, sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que, dando lugar al recurso contencioso-administrativo interpuesto por el Procurador don Santos de Gandarillas Carmona, en nombre y representación de don Ignacio Menchacatorre Díaz de Mendivil, debemos declarar y declaramos nulos, por contrarios a derecho, los acuerdos del Ministerio de Industria a que se contraen estos autos y, en su consecuencia, debemos, asimismo, declarar el derecho del recurrente a que le sea reconocido a efectos del cómputo de trienios el tiempo de servicios prestados en el Ministerio de la Vivienda como Delegado provincial del mismo en Vizcaya, condenando a la Administración a estar y pasar por tal declaración y a llevar a cabo ese reconocimiento con las consiguientes consecuencias económicas y la liquidación de atrasos que procedan; todo ello sin hacer expresa imposición de las costas causadas.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 16 de febrero de 1981.—P. D., el Subsecretario, Enrique de Aldama y Miñón.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

6722

*ORDEN de 16 de febrero de 1981 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 364/1978, promovido por don Carlos Mitjans Stuart contra resolución de este Ministerio de 27 de septiembre de 1977.*

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 364/1978, interpuesto por don Carlos Mitjans Stuart contra resolución de este Ministerio de 27 de septiembre de 1977, se ha dictado con fecha 19 de septiembre de 1980, por la Audiencia Territorial de Madrid, sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que desestimando la inadmisibilidad opuesta por la parte codemandada, debemos desestimar y desestimamos el presente recurso contencioso-administrativo número trescientos sesenta y cuatro de mil novecientos setenta y ocho, promovido por el Procurador don Andrés Castillo Caballero, en nombre y representación de don Carlos Mitjans Stuart, contra la resolución de la Delegación Provincial de Industria de Toledo de veintisiete de septiembre de mil novecientos setenta y siete, por la que desestimando las oposiciones presentadas a la solicitud del permiso de investigación para mineral de caolín, nombrada La Ventosilla, número tres mil doscientos noventa y cinco, del término municipal de Polan, de la que es titular doña María

Teresa Álvarez Simó, ordenó se continuase la tramitación del expediente en su fase de demarcación; y contra la desestimación presunta del recurso de alzada contra la anterior interposición; cuyos acuerdos por ser conformes a derecho informamos, y resolviendo a la Administración de las pretensiones en su contra formuladas, no hacemos especial declaración sobre las costas en este proceso causadas.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 16 de febrero de 1981.—P. D., el Subsecretario, Enrique de Aldama y Miñón.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

6723

*ORDEN de 16 de febrero de 1981 por la que se dispone el cumplimiento de la sentencia dictada por la Audiencia Territorial de Madrid, en el recurso contencioso-administrativo número 264/1978, promovido por don Ricardo Navarro Moreno contra resolución de este Ministerio de 14 de abril y 1 de diciembre de 1977.*

Ilmo. Sr.: En el recurso contencioso-administrativo número 264/1978, interpuesto por don Ricardo Navarro Moreno contra resolución de este Ministerio de 14 de abril y 1 de diciembre de 1977, se ha dictado con fecha 6 de noviembre de 1980, por la Audiencia Territorial de Madrid, sentencia cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que debemos desestimar y desestimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por don Ricardo Navarro Moreno contra los acuerdos de la Subsecretaría del Ministerio de Industria y Energía de catorce de abril y uno de diciembre de mil novecientos setenta y siete, por ser tales actos conformes a derecho. Sin costas.

Así por esta nuestra sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.»

En su virtud, este Ministerio, en cumplimiento de lo prevenido en la Ley de 27 de diciembre de 1956, ha tenido a bien disponer que se cumpla en sus propios términos la referida sentencia y se publique el aludido fallo en el «Boletín Oficial del Estado».

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y demás efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 16 de febrero de 1981.—P. D., el Subsecretario, Enrique de Aldama y Miñón.

Ilmo. Sr. Subsecretario.

6724

*ORDEN de 16 de febrero de 1981 sobre concesión administrativa a «Gergalgás, Sociedad Cooperativa», para la prestación del servicio público de suministro de gas propano a 144 viviendas de la calle Castilla la Vieja, de Fuenlabrada (Madrid).*

Ilmo. Sr.: «Gergalgás, Sociedad Cooperativa», a través de la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía en Madrid, ha solicitado concesión administrativa para el servicio público de suministro de gas propano por canalización, mediante instalaciones distribuidoras de G. I. P., en el conjunto urbano sito en la calle Castilla la Vieja, números 2, 4, 6 y 8, de Fuenlabrada (Madrid), a cuyo efecto ha presentado la documentación técnica correspondiente.

Características de las instalaciones.—Las características de las instalaciones serán básicamente las siguientes:

El Centro de almacenamiento dispone de tres depósitos enterrados de 19.300 litros de capacidad unitaria, con los correspondientes accesorios y dispositivos de seguridad. La red de distribución esta constituida por tubería de acero estirado en frío sin soldadura, de 2 y 1 pulgadas de diámetro según los tramos, y por tubería de cobre de 18/20.

Finalidad de las instalaciones: Mediante las citadas instalaciones se distribuirá gas propano por canalización a 144 viviendas del mencionado conjunto urbano, para los servicios de cocina, agua caliente y calefacción.

Presupuesto.—El presupuesto de las instalaciones asciende a un millón ochocientos treinta y tres mil seiscientos cinco (1.833.605) pesetas.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente instruido al efecto, este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de la Energía, ha resuelto: